

Lucha contra la corrupción: los medios alternativos se portaron mejor

Víctor Liza J.

Sumilla

En tiempos de redes sociales, de capturas de pantalla y de vídeos difundidos por Whatsapp, los medios alternativos e independientes, tanto en la Internet como en el impreso, han jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción de estos años posfujimorismo, marcados por el caso *Lava Jato*, que ha visto caer a varios expresidentes de la República y conocer la trama de corrupción en la que están involucrados varios empresarios. En este artículo explicamos cómo y por qué los «grandes» medios dejaron de investigar, y cuándo fue que ocurrió eso por última vez, además de su sumisión al régimen de turno y a las corporaciones. También revelamos los cambios políticos generados a partir de esas informaciones, varios de ellos con consecuencias sorprendentes para la opinión pública. Finalmente, ponemos en el tapete el contexto de la aparición de los medios alternativos, cómo fueron creciendo en credibilidad ante el gran público y cómo marcaron la pauta informativa, a tal punto que no solo han generado los cambios políticos mencionados en los últimos dos años, sino que ahora llevan la batuta de tal forma que a los medios grandes no les ha quedado otra que alinearse hasta nuevo aviso y cambio de época.

EN 1787, DURANTE SU ALOCUCIÓN ANTE EL PARLAMENTO DEL REINO UNIDO, el escritor y político anglo-irlandés, Edmund Burke, mencionó que había tres poderes dentro de este espacio legislativo: los Lores Espirituales, representantes de la Iglesia anglicana, la congregación oficial de las islas británicas; los Lores Temporales, en representación de la nobleza; y los Comunes, que eran los elegidos por el pueblo.

De inmediato, Burke agregó que el poder más importante era el de la tribuna de prensa, que cubría las incidencias del Poder Legislativo, al que denominó: «cuarto poder».

Si nos ponemos en un contexto actual y no en el «británico» de fines del siglo XVIII, la prensa asume su rol de «cuarto poder» frente a los «poderes del Estado»: el Ejecutivo, que es el Gobierno; el Legislativo, donde están los representantes de la ciudadanía para hacer leyes y fiscalizar; y el Judicial, que imparte justicia. En teoría, su rol es equilibrar la balanza ante los abusos en los que podrían incurrir los otros poderes, con denuncias y revelaciones.

En la práctica, y especialmente en un país como el Perú, dicho rol no es del todo ejercido. En algunos momentos de la historia lo han hecho, pero por lo general no ha sido así. En los últimos tiempos, los grandes medios de comunicación se han limitado a informar en base a lo anecdótico, con énfasis en lo policial y en la farándula. En ese contexto y con la aparición de las nuevas tecnologías, los medios alternativos e independientes se han

destacado por hacer grandes revelaciones, especialmente con la aparición del caso *Lava Jato*, que en los últimos tres años ha dado vuelta y media a la clase política posfujimorismo.

Para comprender mejor la situación actual, es necesario hacer un recorrido en el tiempo de cómo se ha comportado la prensa peruana y en qué contexto surgen las plataformas de periodismo independiente.

La madre del cordero

En otros tiempos, se decía que bastaba con que *El Comercio* (el diario más antiguo y más importante de todos los que existen en el país) colocara una portada reveladora para provocar un golpe de Estado o que una dictadura se vea obligada a convocar a elecciones libres. Con la aparición de otros diarios, la radio y la televisión, los medios de comunicación se convirtieron en fiscalizadores del régimen de turno. Unos eran incisivos y otros moderados. Salvo en épocas de gobiernos militares o de dictaduras como la de Alberto Fujimori, la prensa en general no se callaba.

A partir del régimen de Fujimori esto empieza a cambiar. Hubo una resistencia, liderada por el diario *La República* y la revista *Caretas*, que denunció las fechorías del régimen. Luego de la reelección del ingeniero Fujimori en 1995, el reconocido periodista César Hildebrandt volvió al país tras una obligada estadía en España debido a presiones para que no encuentre un espacio. Una vez en el Perú, se sumó a la oposición: primero en la televisión y luego a cargo del diario *Liberación*. Recién en los dos años finales de la década fujimorista, *El Comercio* se pasó a la oposición. Una nueva estación de televisión por cable, *Canal N*, también fue parte de dicha oposición, no solo televisando las marchas contra el Gobierno y la ilegal re-reelección del ingeniero, sino que transmitió la conferencia de prensa más impactante del siglo: la difusión del vídeo en el que Vladimiro Montesinos, el

asesor del presidente, le ofrecía unos miles de dólares a Alberto Kouri, parlamentario elegido por Perú Posible, con el fin de que se pase al partido oficialista en el Congreso y que este recupere su mayoría. Esa transmisión, que tuvo lugar un 14 de septiembre del año 2000, inició el derrumbe del gobierno fujimorista como si fuera un castillo de naipes, hecho que tardó poco más de dos meses en consumarse.

A partir de la caída del régimen fujimorista, los medios de comunicación, especialmente los canales, empezaron a lavarse la cara. Como Kouri, varios de sus dueños habían recibido dinero de Montesinos para apoyar al Gobierno, lo que era evidente en sus noticieros. Con Alejandro Toledo, quien sucedió a Fujimori tras colocarse como líder de la oposición a la dictadura y en su papel de afectado por el fraude electoral del 2000, hubo una fiscalización implacable: desde el caso Zarái, la hija que tardó en reconocer, hasta algún exabrupto de su esposa Eliane Karp, pasando por los escándalos de sus hermanos. Muchos podrán decir, con el dedo señalador, que esos eran «escandaletes» y que lo más grave es que nadie haya descubierto que el líder del desaparecido partido Perú Posible haya recibido una millonaria coima de Odebrecht a cambio de la concesión de la construcción de un tramo de la carretera Interoceánica en los finales de su gobierno. Si lo vemos en el contexto de aquel tiempo, la prensa cumplió, aparentemente, su rol fiscalizador. Nada hacía suponer lo ocurrido. Pero al final todo se sabe.

Con Alan García nuevamente en el poder el 2006, el rol de la prensa vuelve a distorsionarse. Temerosos los dueños de comunicación de que el entonces candidato del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, ganara las elecciones de ese año y se convirtiera en un Hugo Chávez, en la segunda vuelta le dieron a García todo su apoyo, olvidándose de lo duros que fueron con el líder aprista en su primer gobierno, especialmente con sus políticas económicas, que ya sabemos qué resultados dejaron...

además de los recordados casos de corrupción. El *Canal 2*, entonces de propiedad del empresario Baruch Ivcher (quien durante el fujimorato primero fue entusiasta del régimen y luego opositor), decidió retirar de su programación el espacio televisivo que conducía en aquel tiempo el periodista Hildebrandt, quien no se sumó al cargamontón generalizado contra Humala. Pero ese respaldo a García no se quedó en la campaña electoral: una vez en el Gobierno, *El Comercio* se olvidó de 70 años de antiaprimismo para tratar suavemente al segundo García, ahora alineado con el modelo económico neoliberal. El diario *Expreso*, su principal acusador en su primer quinquenio (1985-1990), se olvidó de las denuncias de esos años.

Es cierto que hubo un paréntesis con García el 2008, cuando estalló el escándalo de los «petroaudios» y «el decano» (así se le dice a *El Comercio*) reveló grandes detalles del caso, a lo que se le sumaban las críticas de uno de los diarios del Grupo El Comercio, *Perú 21*, dirigido por Augusto Álvarez Rodrich, que fuera crítico con el Gobierno.

Con el despido de los periodistas Fernando Ampuero y Pablo O'Brien, integrantes de la unidad de investigación de *El Comercio*, quienes revelaron el caso que hizo caer al entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y con el reemplazo de Álvarez Rodrich por un complaciente Fritz Du Bois, todo volvía a la normalidad, como decía Martín Adán cuando se producía un derrocamiento en el Perú.

García no solo tuvo a su disposición dueños de medios sumisos, aunque no compró como Fujimori, sino que dio amplias pautas publicitarias bien pagadas por el Estado. Más aún, su Gobierno retiró la licencia a varias radios de otras ciudades del país fuera de Lima que se mostraban críticas con su segundo periodo. Esto fue más incisivo luego del 5 de junio del 2009, cuando murieron 24 policías y 10 indígenas en Bagua, en lo que se conoce como «el baguazo».

En palabras del propio Hildebrandt, el expresidente presionó para que el periodista no vuelva a la televisión. En las elecciones del 2011, vuelve el «cuco» de Humala a los medios grandes, que al principio no es tomado en cuenta debido a que andaba cuarto en las encuestas. En marzo pasa de 12% a 30%, y entonces vuelve la contracampaña, y cuando pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, la hija del expresidente de los años 90, apoyan disciplinadamente a la lideresa de Fuerza Popular. Finalmente, el antifujimorismo pudo más y Humala llega a Palacio de Gobierno.

Es en ese período cuando surge una primera camada de medios alternativos. Los primeros en aparecer, justo en el inicio de la presente década y en el final del segundo gobierno de García, son el semanario *Hildebrandt en sus trece*, dirigido por el mencionado ex conductor de televisión, y el portal *IDL-Reporteros*, a cargo de Gustavo Gorriti. Estos medios serán los primeros en revelar los casos de corrupción en los que estaba involucrada la constructora Odebrecht y otras empresas brasileñas. Curiosamente, ambos periodistas fueron formados en la escuela de *Caretas*: el primero en la década de 1970, como jefe de informaciones y entrevistador principal, faceta que lo llevaría a la televisión en años posteriores; y el segundo en los turbulentos años 1980, como investigador de temas de narcotráfico y terrorismo, siendo el más mentado el caso Lamberg, que involucró al partido aprista.

Años antes, al inicio del gobierno aprista, el periodista Marco Sifuentes fundó el blog *El Útero de Marita*, en el que colocaba algunos reportajes. Con el tiempo, este espacio se convertirá en un portal de noticias llamado *Útero.pe*, en el que también se revelarán importantes denuncias sobre casos de corrupción.

Las primeras revelaciones

El 2010, y luego de un corto paso por la radio y último reingreso a la televisión en *Canal 11*, César Hildebrandt anuncia la fundación

de su semanario, *Hildebrandt en sus trece*. En sus primeros editoriales afirma que esta publicación aparecerá «hasta que el público quiera». En el caso de Gorriti, este funda el portal *IDL-Reporteros*, un medio periodístico dedicado a la investigación y revelación de denuncias. Ambos tenían una coincidencia: no tenían compromisos con empresas y no recibían auspiciadores.

Hildebrandt en sus trece e *IDL-Reporteros*, cada uno a su estilo, revelaron varios casos de corrupción del segundo régimen de García. De la misma manera se comportaron cuando comenzó el gobierno de Ollanta Humala, un año después. En sendos reportajes, revelaron la gran cantidad de obras de construcción que Odebrecht había obtenido en el país, de la mano de sus socios peruanos Graña y Montero, JJ Camet, entre otros, así como los proyectos conseguidos por otras empresas brasileñas como OAS y Camargo Correa. Hasta allí, se conocía la penetración de estas empresas en la obra pública y el claro favoritismo que se tenía por estas. Pero lo que no se sabía aún era cómo habían sido obtenidas las obras. Años después se descubrirá la vinculación entre las empresas brasileñas mencionadas con el llamado «club de la construcción», un grupo de empresas peruanas que se «repartía» las obras.

El 2014 surgen dos nuevos portales dedicados a la investigación periodística: *Ojo Público*, fundado por exintegrantes de la desactivada unidad de investigación del diario *El Comercio*, y *Convoca*, dirigido por la periodista Milagros Salazar. Sin obstruirse ni hacerse sombra, y con financiamiento en base a proyectos, harán un trabajo de investigación no solo referido a casos de corrupción, sino que denunciarán afectaciones a la vida y a los derechos humanos, como la minería ilegal en Madre de Dios y los derrames de petróleo en la selva peruana. El diario *La República*, con una unidad de investigación de pocos recursos dirigida por el experimentado periodista Ángel Páez, también acompañará este esfuerzo periodístico, aunque con menor protagonismo. *Útero.pe*,

ya convertido en un portal no solo de investigación, sino de temas culturales, también tendrá relevancia en ese tiempo.

Al mismo tiempo, y en plena retirada desde el segundo gobierno de García, los medios tradicionales, especialmente los grandes canales de televisión, los diarios y las emisoras que monopolizan el espectro radiofónico (léase el Grupo RPP y la Corporación Universal a cargo de Exitosa), se enfocaron en lo ya mencionado, como las noticias policiales y la farándula, a lo que añadirán las noticias de *clickbait* en sus páginas web. Con la aparición de las redes sociales, el público comenzó a mostrar disconformidad con las publicaciones de los medios «tradicionales», buscando otras opciones de información. Sin duda, la falta de credibilidad de los medios grandes ya era una realidad.

En ese contexto, el período comprendido entre la segunda mitad del 2016, época en que Pedro Pablo Kuczynski asumió como presidente del Perú, y el verano de 2017, será un parteaguas que marcará no solo el fin de la clase política posfujimorismo, sino una reorientación de los medios grandes de comunicación, que tendrán que seguir el ritmo de los nuevos medios alternativos, cada vez más con un público afecto. La consecuencia principal de esta situación será la generación de un público más interesado en las noticias políticas y en participar de la cosa pública.

El caso *Lava Jato*

Las primeras revelaciones desde Brasil dan cuenta de que, sin mencionarlos todavía, varios expresidentes y políticos peruanos (y a nivel regional) recibieron dinero de diversas compañías brasileñas, ya sea como sobornos para que les concedan obras públicas o como dinero de campaña a manera de «adelanto» por concesiones en caso de llegar al poder. Esa fue la primera clarinada de alerta que movería el panorama político peruano.

El primero en caer fue el expresidente Alejandro Toledo. Se supo desde Brasil que había recibido 20 millones de dólares en coimas el 2005, cuando estaba por finalizar su gobierno, a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica. Toledo, desde los Estados Unidos, lo negó todo. Pero ya se había descubierto la ruta del dinero: la compra de la casa que hizo en Costa Rica con dinero de una *offshore* en aquel país y la revelación de su examigo, Joseph Maiman, de que él mismo recibió ese dinero a través de esa *offshore*.

De allí en adelante aparecieron más denuncias que fueron involucrando no solo a Toledo, sino a otros expresidentes, como Ollanta Humala, de quien se dijo que había recibido tres millones de dólares en la campaña del 2011. Por esto, pasó ocho meses en prisión preventiva, la que abandonó luego que el Tribunal Constitucional le diera la razón a su pedido de afrontar el proceso en libertad. De igual modo, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia de la República en marzo del 2018, luego de revelarse que era accionista de una empresa que recibió dinero de Odebrecht, justo cuando el ahora exmandatario era presidente del Consejo de Ministros del régimen de Toledo, y se realizaba además la concesión de la mencionada carretera Interoceánica. Actualmente cumple prisión domiciliaria por razones de edad.

A medida que avanzaba este caso, varios políticos de todas las esferas fueron cayendo, aunque con una casualidad: ni Alan García ni Keiko Fujimori, aliados desde el gobierno del primero el 2006, fueron mencionados. Ambos tenían denuncias de otro tipo (como el caso «narcoindultos», descubierto por la «megacomisión» presidida por el excongresista Sergio Tejada), pero archivadas extrañamente por el Poder Judicial y la Fiscalía, o con condenas de funcionarios de segundo orden (como fue el caso de Miguel Facundo Chinguel). La historia cambiaría, ya no como pasó 18 años atrás con los «vladivideos», sino con varios audios que dieron que hablar.

Los audios de «Lava Juez»

A la tranquilidad de tener controlada la situación para el APRA de García y Fuerza Popular de la señora Fujimori, se sumaba el hecho de que el nuevo presidente Martín Vizcarra, quien asumió constitucionalmente el mando tras la renuncia de Kuczynski, no parecía ser una amenaza para sus planes de seguir copando el poder con el fin de continuar ocultando sus actividades delictivas, aunque estas no tardarían mucho tiempo en ser descubiertas. En otras palabras, para estas agrupaciones, Vizcarra sería un títere más manejable que Kuczynski, e incluso podrían buscar su vacancia si fuera necesario.

El 7 de junio del 2018, fecha que debe ser tan recordada como el 14 de septiembre del 2000 (cuando se dio a conocer el primer «vladivideo»), el portal *IDL-Reporteros* difundió una serie de audios de conversaciones entre autoridades de cortes superiores de justicia e integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano que se encargaba de designar jueces, fiscales y funcionarios de organismos electorales. En estos diálogos, dichas autoridades negociaban con congresistas de Fuerza Popular y el APRA la forma de poder excluir a estos últimos de casos de corrupción que los afectaban, a cambio de favores como sobornos o apoyos entre «hermanitos», apelativo cariñoso que acostumbraba a usar el ex juez César Hinojosa para sus interlocutores. Los pedidos iban desde «acelerar» algunos trámites hasta regalos como entradas para ver los partidos de la selección peruana en el mundial de fútbol de Rusia 2018, acontecimiento en el que nuestro equipo pudo ser parte luego de largos 36 años.

Con esto, y con otras revelaciones hechas por el semanario de Hildebrandt y los mencionados portales, a las que se sumaron luego *El Comercio* y canales como *América TV* y *Canal N*, se puso en evidencia un secreto a voces: que además de ser conocida la corrupción en el sistema de justicia, esta estaba bajo el control de las

dos agrupaciones políticas mencionadas, que además controlaron el Congreso hasta su reciente disolución, haciendo y deshaciendo a su favor y persiguiendo a sus opositores con investigaciones ridículas, en vez de fiscalizar y legislar en favor de la ciudadanía, como lo ordena el mandato constitucional.

Esto tuvo un gran impacto político. Dado el nivel de poder que tenían el APRA y el fujimorismo, no solo en el Congreso, sino en el Ministerio Público y el Poder Judicial, el presidente Vizcarra pareció darse cuenta de que venían por él. En su mensaje del 28 de julio del 2018, cuatro meses después de haber asumido el mandato, tomó el toro por las astas. Envío proyectos de ley para hacer reformas en el sistema político y de justicia, señalando que si estas no eran aprobadas por el Congreso, entonces de mayoría fujimorista, se consideraría ello como una segunda negación de confianza dentro del período quinquenal 2016-2021, lo que habilitaba al mandatario a disolver constitucionalmente el Poder Legislativo. Esto obligó al Congreso a ceder e implementar dichas reformas, pero no sin antes pretender que una de estas, la de no reelección de parlamentarios, sea desnaturalizada con la creación de un Senado al que podrían postular los actuales congresistas.

La respuesta de Vizcarra no fue el cierre del Congreso, sino la convocatoria a un referéndum el 9 de diciembre del 2018, en el que sus propuestas fueron respaldadas por entre 85 y 90% de los votos de la ciudadanía, ya cansada de los abusos del APRA y el fujimorismo en el Congreso.

Nuevas revelaciones sobre García y Fujimori: golpes políticos

En ese ínterin, *IDL-Reporteros* sorprendió otra vez y dio nuevos detalles sobre los dineros ilícitos que habrían recibido Keiko Fujimori y Alan García. En el caso de la primera, se supo que Odebrecht aportó a su campaña el 2011. El hecho se complicó más

cuando se supo que el receptor fue Jaime Yoshiyama, ex hombre fuerte de la década de 1990, y que las cuentas no cuadraban, lo que configuraba un caso de lavado de activos. Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez logró demostrar que la señora Fujimori obstruía la justicia, tanto por lo mencionado en el caso «Lava Juez» como por el manejo de su bancada en el Congreso, que insistía en proteger al entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry, quien «blindaba» las acusaciones contra los fujimoristas en el Ministerio Público, además de las finanzas en su partido, en las que hay evidencias de lavado. Con esto, el Poder Judicial aprobó una prisión preventiva en su contra, que originalmente iba a ser de 36 meses, pero que con la nueva sentencia de enero del 2020, cumplirá hasta el 27 de abril del 2021 (se le impuso 15 meses de prisión preventiva).

En el caso de García, *IDL Reporteros* publicó informes sobre coimas a varios de sus funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de parte de la empresa Odebrecht, por la concesión del Metro de Lima (un viejo sueño del líder aprista desde su primer gobierno) y por una conferencia dictada en Brasil por el expresidente, quien en estos últimos tres años viajaba de Madrid a Lima, y viceversa, cuando le venía en gana. Pocos días antes del referéndum, García llegó a la capital peruana para responder ante la fiscalía como testigo. En tiempo récord, el fiscal Pérez logró cambiar la condición del expresidente a la de investigado, emitiéndose una orden de impedimento de salida por 18 meses en su contra. Esto desesperó a García, quien en noviembre del 2018 pidió asilo en la embajada uruguaya, la que, luego de varios días de incertidumbre, no le fue concedida. En abril del 2019, ante una inminente detención preliminar, el expresidente prefirió huir para siempre con un balazo en la sien, un hecho que impactó a propios y extraños.

La prisión preventiva de Keiko Fujimori y el suicidio de Alan García fueron hechos derivados no solo de las actuaciones fiscales en materia de investigación, sino también producto de la acción de la prensa independiente, que seguía investigando el caso. Medios

como *El Comercio*, *Canal N* y *América TV*, así como el diario *La República*, algo más alineado desde antes, se sumaron recién a las investigaciones, en coincidencia con el ascenso de Vizcarra al poder.

Tras el referéndum y estos hechos, Vizcarra envió otros proyectos derivados de la consulta popular. Otra vez el Congreso, con mayoría fujimorista y peso del APRA, volvió a hacerle largas. Vizcarra hizo una segunda cuestión de confianza, que otra vez fue aprobada. Ante otra «mecida» de la oposición profujimorista, el presidente se jugó por el adelanto de elecciones, que fue denegado en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, sin permitir que lo decida el pleno. Ante esto, usó la cuestión de confianza por última vez, cuestionando la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, en el que se pretendía colocar gente cercana al fujimorismo con el fin de lograr la libertad de Keiko Fujimori y poner fin a las investigaciones del caso *Lava Jato*, que ya no eran solamente contra las cabezas, sino contra algunos congresistas. El Legislativo se zurró en el pedido del entonces jefe de gabinete, Salvador del Solar, con lo que Vizcarra procedió a disolver el Congreso constitucionalmente y convocar a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero del 2020. En el plano judicial, varios de los magistrados mencionados en los audios del caso «Lava Juez» han caído en desgracia: Hinostroza está detenido en España, a la espera de la extradición al Perú, que ya ha sido aprobada, mientras que el juez Walter Ríos está en prisión.

Reflexiones finales

Gran parte de los hechos políticos recientes que han generado expectativas en la población, se deben al trabajo de la prensa alternativa e independiente, que, pese a los pocos recursos a diferencia de los grandes canales o las grandes emisoras, apostó por la investigación paciente. Sin esta labor y, principalmente, sin la difusión de los audios del caso «Lava Juez», probablemente la

situación política no sería la que describimos líneas más arriba, y quienes pretendían quedar impunes seguirían paseándose como «Pedro en su casa». Posiblemente Vizcarra ya no estaría en Palacio de Gobierno, sino que por primera vez tendríamos una mujer en la Casa de Pizarro. Como ocurrió en el año 2000 con los «vladivideos», y como sucedió hace más de cuatro décadas con el escándalo Watergate en los Estados Unidos, la prensa independiente ha logrado poner al descubierto a quienes querían abusar del poder para sus propósitos, generando algo de justicia en un país donde parece ser una palabra no existente en el diccionario.

La prensa «grande» se ha mantenido al margen y en un momento ha sido complaciente con algunos de estos políticos. Pero dada la marea llevada a cabo por los medios alternativos, y en tiempos en que ya nada queda en secreto gracias a las nuevas tecnologías, no les ha quedado otro camino que sumarse para recuperar su credibilidad, al menos informando sobre los casos. La prensa alternativa e independiente, con menos recursos y menos sometida a intereses corporativos, es ahora la que da el ejemplo.

¿Hasta cuándo durará esta suerte de «primavera peruana»? Todo dependerá no solo de la acción de los medios de comunicación, sino de los cambios políticos que vengan luego de las elecciones parlamentarias de enero próximo, que algunos analistas han considerado como una especie de «primera vuelta» de las generales de 2021, en las que se elegirá un nuevo presidente. Puede que se inicie una nueva etapa en la política peruana, en la que no sabemos si la esperanza se mantendrá, como parecía ser en el año 2000 luego de la caída de Fujimori, o si el remedio aplicado fue finalmente peor que la enfermedad.